



NUE 103-A-2020 (DH)

XXXXXXXXXX contra Presidencia de la República

Resolución Definitiva

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San Salvador, a las once horas con cuarenta y tres minutos del veintisiete de abril de dos mil veintiuno.

Descripción del caso

El presente procedimiento de apelación ha sido promovido por XXXXXXXXXXXX, en adelante “la apelante” o “la recurrente”, en contra de la resolución **UAIP-147-2020**, emitida el 20 de julio de 2020 por la Oficial de Información de la **Presidencia de la República** (en adelante CAPRES o “el ente obligado”), que denegó la información relativa a:

“El Plan de emergencia contra la plaga de langostas voladoras, solicitado en fecha 13 de julio del corriente año, por medio de la cuenta oficial de twitter del Presidente Nayib Bukele, a los Ministros de Agricultura y Ganadería, Salud Pública y Defensa Nacional, el cual fue recibido el día 14 de julio del corriente año, por el Presidente, de acuerdo a publicación hecha en la cuenta oficial de twitter del Presidente Bukele: “Gracias por el plan contra la plaga, Ministros @Anlikerinfante, @FranAlabi, @merino_monroy. Como lo conversamos ejecútenlo tal cual está para no perder el tiempo. Programaremos visita de campo para constatar el progreso del mismo”.

Al respecto, señaló que la oficial de información del ente obligado resolvió: *“Informar a la peticionante (Sic.) que puede interponer su solicitud de información ante la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ministerio Agricultura y Ganadería, pues*

es la entidad competente respecto a lo requerido, con base a lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley de Acceso a la Información Pública”.

Por su parte, la apelante se mostró inconforme con dicha resolución, señalando lo siguiente: 1) que la información solicitada se encuentra en disponibilidad del ente obligado en vista que fue un requerimiento hecho por el Presidente de la República a los Ministros de las diferentes Secretarías de Estado, por lo que la entidad tiene la obligación de documentarlo; es decir, que tiene la obligación de resguardar esos archivos y ponerlos a disposición de los ciudadanos que lo soliciten; y 2) que el Art.3 inciso 1° del Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo, señala directamente una relación jerárquica entre La Presidencia de la República y las respectivas secretarías de Estado: “El Presidente de la República, como máxima autoridad del Órgano Ejecutivo le corresponde dirigir, coordinar y controlar las acciones de las Secretarías de Estado y las dependencias de éstas, así como inspeccionar unas y otras”. En ese sentido, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, Salud Pública y Defensa Nacional, que elaboraron el “Plan de emergencia contra la plaga de langostas voladoras” que se ha solicitado, responden jerárquicamente a la Presidencia de la República.

Por lo anteriormente expuesto, **solicitó que el IAIP requiera a la Presidencia de la República, el Plan de emergencia contra la plaga de langostas voladoras**, requerido en fecha 13 de julio del corriente año, por medio de la cuenta oficial de twitter del Presidente Nayib Bukele, a los Ministros de Agricultura y Ganadería, Salud Pública y Defensa Nacional.

El Instituto admitió la apelación y designó a la Comisionada Claudia Liduvina Escobar Campos para instruir el procedimiento y elaborar el proyecto de resolución. No obstante, dado su suplencia en el cargo, el mismo ha sido reasignado a la Comisionada **Daniella Huevo Santos**. En ese orden, el 4 de septiembre de 2020, la oficial de información de CAPRES remitió el expediente administrativo relacionado con el presente caso.

En el informe rendido por XXXXXXXXXXXXX, en su calidad de apoderado especial del Presidente de la República, se ratificó lo expuesto por la oficial de información, en el sentido que la entidad que resguarda dicho plan es el MAG. Por último, solicitó que se tenga por rendido el informe de ley en sentido negativo.

La audiencia oral se llevó a cabo de manera virtual en la fecha y hora señalada, por medio de la plataforma “Meet” de Google, con la comparecencia de la apelante XXXXXXXXXXXXX y el apoderado del ente obligado, licenciado XXXXXXXXXXXXX, quienes manifestaron no contar con incidentes que interponer para la realización de la misma ni prueba que incorporar al presente procedimiento. Posteriormente, se llevó a cabo la fase de alegatos, en la cual ambas partes ratificaron sus posturas. Por parte del Pleno, no se realizó ninguna pregunta de índole aclaratoria.

Análisis del caso

Para el análisis que nos concierne, este Instituto ha determinado su pronunciamiento respecto a: *si el plan de emergencia contra la plaga de langostas voladoras, solicitado por la apelante, es información que debe estar en poder de la Presidencia de la República*. En este contexto, el examen del caso seguirá el orden lógico siguiente: **(I)** Principio de máxima publicidad y sus efectos; y, **(II)** Análisis del caso en concreto.

I. El principio de máxima divulgación ha sido reconocido en el sistema interamericano como un principio rector del derecho a buscar, recibir y difundir información, contenido en el Artículo 13 de la Convención Americana. En este sentido, tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), han establecido que el derecho de acceso a la información debe estar regido por el “principio de máxima divulgación”¹. Asimismo, el numeral 1 de la resolución CJI/RES.147 (LXXIII-O/08) (“Principios sobre el Derecho de Acceso a la Información”) del Comité Jurídico Interamericano ha establecido que, “[t]oda

¹Corte I.D.H., *Caso Claude Reyes y otros Vs. Chile*. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Serie C No. 151, párr. 93; Corte I.D.H., *Caso Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia) Vs. Brasil*. Sentencia de 24 de noviembre de 2010. Serie C No. 219. Párr. 230.

información es accesible en principio. El acceso a la información es un derecho humano fundamental que establece que toda persona puede acceder a la información en posesión de órganos públicos, sujeto sólo a un régimen limitado de excepciones²”.

En ese orden, el Art. 4 letra “a” de la LAIP establece la máxima publicidad como principio rector del acceso a la información pública, el cual demanda que la información en poder de los entes obligados es pública y accesible y sometida a un régimen limitado de excepciones. Entonces, para garantizar dicho principio y el de disponibilidad, la LAIP configuró un procedimiento sencillo y expedito que facilite el acceso de la información pública a toda persona.

Asimismo, la Corte IDH, se ha manifestado sobre el principio de máxima publicidad, en el sentido que: “en una sociedad democrática es indispensable que las autoridades estatales se rijan por el principio de máxima divulgación, de manera que toda la información en poder del Estado se presuma pública y accesible, sometida a un régimen limitado de excepciones”³.

También, se puede interpretar que los efectos del principio de máxima publicidad frente a la información que produzca, administra o se encuentra en poder de los entes obligados⁴, son que: a) el derecho de acceso es la regla y el secreto es la excepción⁵; b) la carga probatoria para justificar cualquier negativa de acceso a la información debe recaer al órgano que fue solicitada⁶; y, c) preeminencia del derecho de acceso a la información en caso de conflictos de normas o faltas de regulación⁷.

En relación a las limitaciones al DAIP se ha pronunciado la “Declaración Conjunta de 2004, de los relatores para la libertad de expresión”, en la que se efectuó una

² CJI/RES. 147 (LXXIII-O/08), *Principios sobre el derecho de acceso a la información*, 7 de agosto de 2008. Punto resolutivo 7. Disponible en: http://www.oas.org/cji/CJI-RES_147_LXXIII-O-08.p

³ CIDH- Caso Gomes Lund y otros Vs. Brasil. Sentencia de 24 de noviembre de 2010. Serie C, N° 219, párrafo 230.

⁴ El Art. 7 de la LAIP, contiene quienes son los entes obligados a la mencionada ley.

⁵ Relatoría especial para la libertad de expresión, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “El Derecho de Acceso a la Información en el marco jurídico interamericano, segunda edición. 2012.

⁶ Ídem

⁷ Ídem

formulación sintética de los requisitos que deben cumplir las limitaciones al derecho de acceso a la información: que “el derecho de acceso a la información deberá estar sujeto a un sistema restringido de excepciones cuidadosamente adaptado para proteger los intereses públicos y privados preponderantes, incluida la privacidad”, **que “las excepciones se aplicarán solamente cuando exista el riesgo de daño sustancial a los intereses protegidos y cuando ese daño sea mayor que el interés público en general de tener acceso a la información”**, y que “la autoridad pública que procure denegar el acceso debe demostrar que la información está amparada por el sistema de excepciones”⁸.

II. Una vez establecido lo anterior, corresponde determinar si es competencia de la Presidencia de la República, entregar la información solicitada por la apelante.

En primer lugar, el ente obligado alega que “el plan de emergencia contra la plaga de langostas voladoras” no es información que haya sido administrada, generada o se encuentre en poder de esa cartera de Estado, por lo que re-direccionaron a la apelante a solicitarlo al Ministerio de Agricultura y Ganadería, por ser este ministerio el ente competente para entregar dicha información.

Expuesto lo anterior, diremos que el artículo 2 de la LAIP establece que: “Toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información generada, administrada o en poder de las instituciones públicas y demás entes obligados de manera oportuna y veraz, sin sustentar interés o motivación alguna”.

Bajo esa lógica, de acuerdo al Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo, se comprende que la distribución funcional de las entidades que componen al Órgano Ejecutivo se establece por medio de Ministerios o Secretarías de Estado, designando a cada uno de ellos un ministro o viceministro como titulares de dichas Administraciones; es decir, que la competencia funcional de cada una de esas instituciones busca una gama de

⁸ Declaración Conjunta del Relator Especial de las Naciones Unidas (ONU) para la Libertad de Opinión y de Expresión, el Representante para la Libertad de los Medios de Comunicación de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), y el Relator Especial de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para la Libertad de Expresión (2004). Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/expresion/documentos_basicos/declaraciones.asp

objetivos diferenciados pero vinculados directamente al Presidente de la República. Por dicha causal, a partir de las competencias funcionales atribuidas a cada dependencia que conforma el Órgano Ejecutivo, los oficiales de información únicamente pueden iniciar y dar trámite a solicitudes de información cuando la documentación requerida sea administrada, se encuentre en poder o haya sido generada por la cartera de Estado requerida.

Acompañado a lo anterior, ha de traerse a colación las funciones que desempeña el oficial de información como servidor a cargo de la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP), entre la que ha de destacarse la señalada en el art. 50 letra “c” de la LAIP el cual indica que *“El oficial de información tendrá las funciones siguientes: Auxiliar a los particulares en la elaboración de solicitudes y, en su caso, orientarlos sobre las dependencias o entidades que pudieren tener la información que solicitan”*, lo cual se complementa a la luz de lo dispuesto en el inciso final del art. 10 de la LPA, el cual dispone *“Cuando una petición se dirija a un funcionario o autoridad y ésta considere que la competencia para resolver corresponde a otro funcionario o autoridad de distinto órgano o institución, indicará esto último al interesado y le devolverá la petición dentro de los cinco días siguientes a su recepción”*, es decir, que la resolución proveída por la oficial de información de **CAPRES** busca reorientar a la ahora apelante a modo que pueda dirigir su solicitud a la autoridad que, evidentemente, tiene en su poder, administra y generó la información requerida, todo ello a modo de prevenir actuaciones innecesarias por parte de la Administración Pública.

Finalmente, en consideración a lo ya mencionado, ha de considerarse como acertada la resolución emitida por la oficial de información de **CAPRES**, por lo que resultará necesario confirmar la misma con base a lo dispuesto en el contenido de esta resolución definitiva, a fin de aclararle a la apelante que para obtener acceso a la información requerida por su persona, deberá de dirigir su solicitud a la autoridad que claramente administra y generó la información solicitada, como bien fue dicho en la

